



RESOLUCIÓN.- Hermosillo, Sonora, a veintiséis de octubre del año dos mil veinte.-

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO DE SONORA

- - - Vistas para resolver en definitiva las constancias que integran el Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa, tramitado bajo el expediente número **RO/46/16**, instruido en contra del servidor público el Ciudadano [REDACTED] quien se desempeñó como [REDACTED] adscrito al **Fondo de Operación de Obra Sonora SI (FOOSI)**; por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 63, fracciones I, II, IV, VIII, XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y,-

-----**RESULTANDO:**-----

1.- Que el día ocho de febrero del año dos mil dieciséis, se recibió en esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, hoy Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General escrito signado por la Ciudadana **Licenciada Alma América Carrizosa Hernández**, en su carácter de Directora General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas al servidor público mencionado en el preámbulo de esta resolución.-

2.- Que mediante auto dictado con fecha del día dos de mayo del año dos mil dieciséis (Fojas 178 a la 182) se radicó el presente asunto, ordenándose iniciar las diligencias y girar los oficios necesarios a fin de resolver conforme a derecho corresponda; asimismo, se ordenó citar al Ciudadano encausado [REDACTED] por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas.-

3.- Que con fecha del día ocho de junio del año dos mil dieciséis, se emplazó formal y legalmente al Ciudadano encausado [REDACTED] (Fojas 184 a la 192); como presunto responsable, mediante diligencias de emplazamiento personal practicada por el personal de esta Unidad Administrativa, en la que se le citó en términos de Ley para que compareciera a su respectiva Audiencia de Ley, prevista por el artículo 78 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, haciéndole saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se le imputan, el día y hora para la celebración de la Audiencia de Ley, así como su derecho para contestar las imputaciones en su contra, ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniere, por sí o por conducto de un representante legal o defensor.-

4.- Que siendo las nueve horas del día veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis, se levantó la respectiva Acta de Audiencia de Ley del Ciudadano encausado [REDACTED]

[REDACTED] (Fojas 198 a la 200); en la que se hizo constar con la presencia de la Ciudadana **Licenciada Lizeth Flores Gámez**, en su carácter de Representante Legal del encausado en mención; donde en tales actos la Representante Legal del encausado realizó una serie de manifestaciones a las imputaciones formuladas en contra de su representado, presentando el respectivo escrito de contestación de denuncia en el cual ofrece los medios de convicción que estimó pertinentes, haciéndose en ese acto de su conocimiento que queda concluido el ofrecimiento de pruebas, y que en lo sucesivo sólo podrán ofrecer pruebas supervenientes.-----

5.- Posteriormente, mediante auto con fecha del día quince de octubre del presente año, se citó el asunto para oír resolución, la que ahora se pronuncia:-----

SECRETARÍA DE LA
Coordinación de
y Resolución de

-----**CONSIDERANDO:**-----

I.- Esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en relación con el artículo 26 inciso "C" fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, los artículo 2, 3 fracción V, 63, 63, 64 fracción I, 62, 63, 64 fracción I, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y con los artículo 2 y 14 fracción I del Reglamento Interior aplicable de esta Dependencia.-----

II.- Los presupuestos procesales necesarios para la validez del presente procedimiento, como lo son la legitimación de quien denuncia y la calidad de servidores públicos a quienes se les atribuyen los hechos materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, el primero al ser presentada la denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata de la Ciudadana **Licenciada Alma América Carrizosa Hernández**, en su carácter de Directora General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, quien acredita el cargo con el que se ostenta por exhibir copia certificada de su nombramiento con fecha del día veintidós de octubre del año dos mil quince, otorgado por la Gobernadora del Estado de Sonora, la Ciudadana **Licenciada Claudia Artemiza Plavlovich Arellano** y, refrendado por el Ciudadano **Licenciado Miguel Ernesto Pompa Corella**, en su carácter de Secretario de Gobierno (Foja 06), y la cual denunció ejerciendo la facultad que le otorga el artículo 15 bis fracción XII y XV del Reglamento Interior Aplicable de la Secretaría de la Contraloría General. El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor público del encausado, quedó debidamente acreditada de la siguiente manera: en lo que respecta al Ciudadano [REDACTED] en su carácter de [REDACTED]

[REDACTED] adscrito al Fondo de Operación de Obra Sonora Si (FOOSI), a quien se le acredita el cargo con el que se le pronuncia, por exhibir copia certificada de su nombramiento con fecha del día veintidós de febrero del año dos mil once, otorgado por el entonces Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, el Ciudadano **Guillermo Padrés Elías**, y refrendado por el entonces Secretario de Gobierno, el Ciudadano **Héctor Larios Córdova** (Foja 09); documentales a las que se les da valor

pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios competentes para ello, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. La anterior valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, prevista en los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. La valoración de las pruebas se sustenta además en la Jurisprudencia 2ª./J.2/2016 de la Décima Época en Materia Común, Civil, Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo Registro 2010988, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Página: 873, cuyo rubro y texto fundan:-----

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
ALDRIN
e Sus
onsa
rimonia

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación de los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese valor probatorio pleno cuando no exista certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de diversas copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, cuando la copia es compulsada por un funcionario público, ello significa que es una reproducción del original y, por tanto, hace igual fe que el documento original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención para crear convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo representado en el cotejo; pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo representado en ellas", contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en la certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que las copias certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda otorgársele valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica en los actos que emite.

--- En ese sentido, esta Autoridad Resolutora advierte que la capacidad para denunciar de la Ciudadana **Licenciada Alma América Carrizoza Hernández**, en su carácter de Directora General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, se acredita mediante el nombramiento que exhibió a la denuncia que nos ocupa y el cual obra a foja seis, misma que denunció en base a la facultad que le otorga el artículo 15 bis fracciones XII y XV del Reglamento Interior aplicable de la Secretaría de la Contraloría General del Estado vigente al momento de los hechos, para interponer formal denuncia por los hechos que ocupan el presente Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa; asimismo, quedó debidamente acreditada la calidad de servidor público del hoy encausado, al exhibirse copia certificada de su respectivo nombramiento, mismo que obra a foja nueve del presente procedimiento.-----

--- En conclusión, esta Resolutora determina que la denuncia interpuesta es procedente en base a las consideraciones anteriormente expuestas, ya que la capacidad para denunciar establecida en el Reglamento Interior aplicable de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, puede ejercitarla aquél que se acredite como Titular de la Unidad Administrativa, por lo que en el caso que nos ocupa, la legitimación ad causam se avala con el nombramiento con el que se ostenta la

Ciudadana Licenciada Alma América Carrizoza Hernández, al momento de presentar la formal denuncia en esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial (otrora Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial), mismo que obra dentro del presente procedimiento administrativo. Lo anterior, en apoyo en las siguientes tesis jurisprudenciales VI.3°.C. J/67 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito; y, XXI.4°. J/5 del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, mismas que a continuación se transcriben:-----

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.

Debe distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable. En efecto, ésta consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva.

LEGITIMACIÓN PASIVA AD CAUSAM. POR SER UNA CUESTIÓN QUE ATAÑE AL FONDO DEL LITIGIO DEBE RESOLVERSE AL DICTARSE EL LAUDO RESPECTIVO.

Si la parte actora en el juicio laboral impugna la personalidad de su contraria con motivo del reconocimiento que la Junta hizo de una de las demandadas como propietaria de la fuente de trabajo, el tribunal obrero responsable no debe admitir a trámite ese medio de impugnación como si se tratara de incidente de falta de personalidad, pues en esa hipótesis no se está controvirtiendo un aspecto de personería, sino de legitimación ad causam, menos puede resolverlo dentro de la instrucción como una excepción de previo y especial pronunciamiento, en tanto que como excepción dilatoria la Junta debe pronunciarse hasta el dictado del laudo que resuelva la Litis de fondo, por tratarse de un problema de legitimación pasiva ad causam, la cual es condición para obtener laudo favorable, en virtud de que quien comparece al juicio ostentándose como propietaria de la fuente de trabajo demandada no representa a otra persona, ni hace valer en nombre de otro algún derecho, sino que comparece a nombre propio.

III.- Que como se advierte de los resultandos 2, 3 y 4 de esta Resolución, y acatando la Garantía de Audiencia consagrada por el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa del servidor público encausado, al hacerle saber de manera personal y directa los hechos presuntamente constitutivos de sanción administrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas a su favor y presentar alegatos por sí mismos o por medio de defensores que para el caso designare; realizando la aclaración de que dichas imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia y anexos que obran a fojas de la 1 a la 177; dentro del expediente administrativo en el que se actúa, misma con la que se le corrió traslado al encausado cuando fue debidamente emplazado, denuncia que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra insertase.-----

IV.- Que la denunciante, acompañó a su libelo los medios de pruebas que consideró eran aptos para acreditar los hechos atribuidos al Ciudadano encausado [REDACTED]

[REDACTED] y a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, probanzas que se les da valor probatorio pleno, acorde a los principios y reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 323 fracciones IV y VI, 324 fracción II, 325, 330 y 331 todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, atento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.-----

AUTORIDAD JUDICIAL
MUNICIPAL

V.- Por otra parte, dentro del expediente en que se actúa, obra la diversa acta de Audiencia de Ley del Ciudadano encausado [REDACTED] siendo ésta a las nueve horas del día veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis y en las cual se hizo constar con la comparecencia de la Representante Legal del encausado, la Ciudadana **Licenciada Lizeth Flores Gámez**, dando contestación a las imputaciones realizadas en contra de su representado, presentando el escrito de contestación de denuncia, oponiendo sus defensas y excepciones y manifestando lo que a su derecho conviniera (Fojas 198 a la 200); ofreciendo, diversos medios de convicción para desvirtuar los hechos que se le imputan, dictándose el correspondiente auto que provee sobre las pruebas ofrecidas con fecha del día dieciocho de mayo del año dos mil diecisiete (Fojas 256 a la 259), mismas probanzas que se tuvieron por admitidas.-----

VI.- Ahora bien, al haberse analizado y valorado las pruebas rendidas por la denunciante y por el encausado, de acuerdo con las reglas que fija el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora para su valoración, esta Autoridad procede a analizar las manifestaciones hechas por este último, analizando los medios de convicción de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual en su integridad a la letra dice: **"...El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia debiendo, además observar las reglas especiales que la ley fije."**, **"La valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, por el enlace interior de las rendidas y las presunciones, forme una convicción, que deberá ser cuidadosamente fundada en la sentencia."**, **"En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de prueba de las respuestas de las partes cuando las llame a su presencia para interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir inspecciones que se hayan ordenado; y, en general, de su comportamiento durante el proceso."**, resultando lo siguiente:-----

--- El presente procedimiento de responsabilidad administrativa se inició con auto de radicación con fecha del día **dos de mayo del año dos mil dieciséis** (Fojas 178 a la 182), con base en las imputaciones que se contienen en el escrito inicial de denuncia y anexos presentada por la Ciudadana **Licenciada Alma América Carrizoza Hernández**, en su carácter de Directora General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, de donde se advierte que las imputaciones que la denunciante le atribuye al hoy encausado, surgen a raíz de la auditoría número **SON/PROGREG/15**, que se realizaría a las Obras que se ejecutaron con recursos de los Programas Regionales del Ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas), por el ejercicio

presupuestal **dos mil doce**, mismo que a continuación se detalla:-----

--- A).- Que con fecha del día dieciocho de octubre del año dos mil diez, se celebró el Contrato Mixto de Obra Pública número **FOOSI-NC-CT-AP-10-001**, entre el Gobierno del Estado de Sonora a través del Fondo de Operación de Obras Sonora SI y las empresas Exploraciones Minerales del Desierto S.A. de C.V., Mezquite Construcciones S.A. de C.V., Terracerías, Construcciones y Vías Férrreas S.A. de C.V., Constructora Miramar S.A. de C.V., Inmobiliaria Carlos Alberto S.A. de C.V., Tecno Asfaltos y Terracerías S.A. de C.V., Proyectos y Consultoría del Desierto S.A. de C.V., Gluyas Construcciones S.A. de C.V., Constructora Trax S.A. de C.V., La Azteca Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V., Grupo Krene S.A. de C.V., Afel Construcciones S.A. de C.V., Desarrollos Tecnológicos del Noroeste S.A. de C.V., CSI Ingenieros México S.A. de C.V., Acuícola del Desierto S.A. de C.V., Proyectos y Supervisión JH Romero S.A. de C.V., encomendándoles lo concerniente a la Obra denominada: **"PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA PLUTARCO ELÍAS CALLES, A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA"**; pactándose un plazo para su ejecución a los contratistas de quinientos veintiún días naturales, debiendo iniciar el día veintiocho de octubre del año dos mil diez, y terminar el día treinta y uno de marzo del año dos mil doce, tal y como se desprende de la Cláusula Quinta del Contrato que nos ocupa, fijándose como monto del contrato la cantidad de \$2'834'202,930.43 M.N. (SON: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 43/100 MONEDA NACIONAL) ya con I.V.A. incluido, por lo que a su vez, la citada Entidad y las empresas contratistas celebraron los Convenios Adicionales números **FOOSI-NC-CT-AP-10-001-C3, FOOSI-NC-CT-AP-10-001-C4, FOOSI-NC-CT-AP-10-001-C5, FOOSI-NC-CT-AP-10-001-C6 y FOOSI-NC-CT-AP-10-001-C7**, con la finalidad de incrementar el monto original y el periodo de ejecución de los trabajos por la falta de recursos, designando mediante Oficio número **FOOSI-CT-001-11** con fecha del día veintidós de febrero del año dos mil once, como [REDACTED] al Ciudadano [REDACTED] [REDACTED]-----

--- Derivado de lo anterior, con fecha del día nueve de mayo del año dos mil doce, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sonora, celebraron el **Convenio de Otorgamiento de Subsidios para los Programas Regionales del Ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas)** del ejercicio presupuestal **dos mil doce**, mediante el cual, se autorizó al Fideicomiso Fondo de Operación de Obras Sonora SI, recursos federales por un monto de \$350'000,000.00 M.N. (SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para la ejecución del: **"PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA PLUTARCO ELÍAS CALLES, A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA"** (Fojas 24 a la 49).-----

--- Por otro lado, señala la denunciante que la Secretaría de la Función Pública, realizó de manera directa la auditoría a los recursos presupuestales autorizados al Fondo de Operación de Obras

Sonora SI, razón por la cual mediante Oficio número **SCAGP/200/081/2014**, con fecha del día veintisiete de mayo del año dos mil catorce, se le comunicó al Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, la orden de auditoría número **SON/PROGREG/15**, que se realizaría a las obras que se ejecutaron con recursos de los Programas Regionales del Ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas) por el ejercicio presupuestal **dos mil doce**, por lo que a través del mismo, se le requirió a la citada Entidad diversa documentación de tipo financiera y técnica, por lo que con fecha del día nueve de junio del año dos mil catorce, se procedió a efectuar la elaboración del **Acta de Inicio de Auditoría SON/PROGREG/14**, por lo que con fecha del día veinte de junio del año dos mil catorce, el personal auditor de la Secretaría de la Función Pública emitió la **Cédula Analítica de Revisión del Expediente Unitario de Obra**, en la cual señaló las documentales existentes y faltantes en el expediente unitario de la obra amparada bajo el Contrato número **FOOSI-NC-CT-AP-10-001**, y una vez realizado la verificación documental del expediente unitario de la obra inherente, se constató la existencia de deficiencias en la integración de su expediente unitario de obra, inherentes a la fase de Planeación, Programación y Presupuestal, por la falta de integración o presentación documental e información que soporta y comprueba la erogación de los recursos asignados en el ejercicio fiscal **dos mil doce**, procediendo a emitir la **Cédula de Observaciones número 01**, con fecha del día nueve de julio del año dos mil quince, denominada como: **"INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN"**; siendo preciso mencionar que dicha Cédula de Observaciones fue remitida a la Entidad mediante oficio número **ECOP-812/2015** con fecha del día quince de julio del año dos mil quince, el cual contiene el **Informe de Auditoría**, dentro del cual se precisan los resultados, conclusiones, recomendaciones generales y las cédulas de observaciones producto de la misma, estableciéndose como fecha de compromiso el día diez de septiembre del año dos mil catorce, para hacer llegar la documentación que solventara las irregularidades detectadas.-----

- - - Atribuyendo la denunciante al Ciudadano encausado [REDACTED]

[REDACTED] las irregularidades que a continuación se especifican:-----

- - - Al ciudadano encausado [REDACTED] en su carácter de [REDACTED] adscrito al Fondo de Operación de Obra Sonora SI (FOOSI), incumplió con las funciones indicadas para su puesto de [REDACTED] ya que incumplió con las funciones inherentes a su cargo las cuales se señalan en el artículo 17 del Reglamento Interior del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, específicamente en su fracción VI, así como lo establecido en el Apartado 96.03 del Manual de Organización del FOOSI, los cuales a la letra dicen: **"Artículo 17. Fracción VI.- Controlar y tramitar las bitácoras de obras que se realicen por contrato, así como la documentación del proceso de la obra, hasta su integración en el expediente unitario"** y, **"Apartado 96.03.- Supervisar la ejecución de las obras y proyectos realizados por el Fondo"**, incurriendo así en lo establecido en las líneas que anteceden, ya que durante la verificación documental del expediente unitario de obra, se constató la existencia de deficiencias en la integración de su expediente, inherentes a la fase de Planeación, Programación y Presupuestal, tal y como se desprende en el anexo uno de la **Cédula de Observaciones número 01** (Fojas 119 a la 125).-----

- - - Por todo lo anterior, la denunciante considera que le resulta presunta responsabilidad administrativa al hoy encausado [REDACTED] en su carácter de [REDACTED] adscrito al Fondo de Operación de Obra Sonora SI (FOOSSI), debido a que con su conducta trasgredió las siguientes disposiciones: Artículo 63 en sus fracciones I, II, IV, VIII, XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, los que a la letra dicen:-----

SECRETARIA DE LA C
Coordinación Ejec
y Resolución de
y Situación

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios

Artículo 63.- *Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio:*

- I.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo.*
- II.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio.*
- IV.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia.*
- VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquellas.*
- XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.*
- XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos.*

- - - Es por lo anteriormente dicho, que la hoy denunciante considera que le resulta presunta responsabilidad administrativa al Ciudadano encausado [REDACTED] debido a que con su conducta presuntamente trasgredió las disposiciones específicas a su cargo, transcritas en párrafos precedentes.-----

- - - En ese orden de ideas, es menester analizar los argumentos que el encausado expresó al dar contestación a la denuncia, porqué, sin desconocer de manera alguna la trascendencia que reviste el cumplimiento de las obligaciones que le asisten al servidor público encausado, para estar en aptitud legal de concluir si una conducta debe ser sancionada como falta administrativa, es indispensable tomar en cuenta las circunstancias que rodearon su comisión y lo que al respecto alegó el denunciado, tal como lo reconoce el legislador en la fracción II del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, conforme al cual se les da el derecho de contestar las imputaciones que se les formulan, mismo que a la letra dice:-----

Artículo 78.- *En el ámbito de sus respectivas competencias, la Contraloría y las Contralorías Municipales impondrán las sanciones administrativas a que se refiere el artículo 68 de esta Ley, conforme al siguiente procedimiento:*

- II.- Se citará al supuesto infractor a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputan, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho para contestar las imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, por sí o por medio de un defensor.*

- - - Ahora bien, con base en lo anterior, se impone analizar los argumentos que la representante legal del encausado [REDACTED] expresó tanto en la Audiencia de Ley con fecha del día veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis (Fojas 198 a la 200), así como en el escrito de contestación a la denuncia opuesta en contra de su representado, mismo que

exhibió en dicha diligencia de Audiencia de Ley y la cual obra agregada a Fojas de la 208 a la 249; argumentos tendientes a desvirtuar las presuntas irregularidades atribuidas al hoy denunciado, advirtiéndose que en dicho escrito de contestación viene manifestando diversas defensas y excepciones en contra de los hechos que se le imputan, desprendiéndose de la misma que opone la excepción de prescripción a la sanción administrativa del presente sumario que nos ocupa, señalando en dicha excepción de prescripción lo siguiente:-----

3.- Prescripción de la sanción administrativa.- Para el supuesto evento sin conceder que esta H. Autoridad Jurisdiccional encontrara procedente la denuncia que nos ocupa, de conformidad con el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, se opone la excepción de prescripción de la sanción administrativa al actualizarse los supuestos del mencionado artículo 91, toda vez que las presuntas faltas administrativas que señala la denunciante, en toda caso, sin conceder que existieron ocurrieron hace más de tres años anteriores a la radicación dictada por esa autoridad; ...tenemos que aun el supuesto que estos hipotéticos hechos fuesen atribuibles a mi persona, indiscutiblemente a la fecha de radicación de la presente acusación han transcurrido en exceso más de tres años; por lo que en cualquier hipótesis esta prescrita la acción que se viene denunciando.

- - - Ahora bien, al analizar esta Autoridad Resolutora la anterior excepción opuesta por el hoy encausado, advierte que la auditoría trató hechos que tuvieron lugar en el año dos mil doce, sin embargo, la denuncia aparece con fecha de recibido por esta Autoridad Administrativa con fecha del día ocho de febrero del año dos mil dieciséis, y atendiendo a que el inicio del procedimiento sancionatorio se dio con el auto de radicación con fecha del día dos de mayo del año dos mil dieciséis (Fojas 178 a la 182), es claro que habían transcurrido más de tres años entre la fecha en que ocurrieron los hechos denunciados y la del inicio del procedimiento administrativo que nos ocupa; por lo tanto, se concluye que los hechos base de la denuncia se hicieron del conocimiento de la Autoridad Instructora cuando ya habían prescrito, de acuerdo a lo establecido por el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, que prevé:-----

Artículo 91.- La prescripción de las sanciones administrativas a que se refiere este título se sujetara a lo siguiente:

I.- Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor, no excede de diez veces el salario mínimo general mensual vigente en la capital del estado; y
II.- En los demás casos prescribirán en tres años.
El plazo de prescripción se contara a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que se hubiese cesado, si fuese de carácter continuo. En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto, se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa.

- - - En las condiciones apuntadas, esta Resolutora considera que el referido artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, regula, a saber, dos contenidos, el plazo de prescripción de la facultad sancionadora y el inicio del cómputo de dicho plazo. En ese sentido, tenemos que las conductas reprobables realizadas por el encausado, no se ajustan a lo establecido por la fracción I del artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, toda vez que las conductas que se atribuye al encausado no son estimables en dinero, razón por la que se actualiza el supuesto de la fracción II

del mismo artículo 91, el cual a la letra dice: **“Artículo 91.- La prescripción de las sanciones administrativas a que se refiere este Título se sujetarán a lo siguiente: II.- En los demás casos prescribirán en tres años. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que se hubiese cesado, si fuese de carácter continuo. En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto, se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa...”**; lo anteriormente transcrito denota que la responsabilidad administrativa que se le imputa al Ciudadano encausado [REDACTED] es de tres años, toda vez que no se le atribuye un daño patrimonial al Estado, ni un beneficio obtenido derivados de la conducta irregular atribuida, sin embargo, dicho plazo no se interrumpió, ya que el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa inició con fecha del día dos de mayo del año dos mil dieciséis (Fojas 178 a la 182), donde se ordenó la radicación del mismo, tal y como lo preceptúa el artículo 78 fracción I de la Ley de Responsabilidades antes citada; por lo que entre una fecha y otra, tenemos que ya habían transcurrido en demasía los tres años que marca el precepto aludido para que esta Resolutoria conociera del asunto que nos ocupa y por ende, en su caso, impusiera la sanción respectiva. -----

- - - Por tal motivo, es factible declarar la prescripción de las facultades sancionadoras de esta autoridad en el presente asunto, toda vez que se radicaron hechos notoriamente prescritos, puesto que el auto de radicación es el acuerdo que da inicio al procedimiento tal y como lo establece la fracción I del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, siendo el mismo acuerdo de inicio de procedimiento el que interrumpe el plazo para la prescripción, según lo dispuesto por la fracción II del artículo 91 de la Ley de Responsabilidades antes descrita.-----

- - - Lo anterior es así, porque tomando en cuenta el artículo 91 fracción II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la prescripción de los tres años no inicia a partir de que las autoridades denunciantes tienen conocimiento de la conducta irregular atribuida al servidor público, sino a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo. Sirven de sustento en las Tesis Aisladas en Materia Administrativa que se identifican con los datos siguientes: tesis I.4o.A.90 A, de la Novena Época, con Registro: 202726, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, de Abril de 1996, página 437 y tesis I.1o.A.226 A, de la Octava Época, con Registro: 208792, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y Publicada en el Semanario Judicial de la Federación XV-II, de Febrero de 1995, página 526, cuyos rubros y textos establecen:-----

“PRESCRIPCION PARA SANCIONAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS, COMPUTO PARA EMPEZAR A CONTAR LA. (ESTA TESIS MODIFICA LA MARCADA CON EL NUMERO 769 (OCTAVA EPOCA), CUYO RUBRO ES: PRESCRIPCION PARA SANCIONAR A FUNCIONARIOS, NO CORRE TERMINO PARA LA INSTITUCION, MIENTRAS ESTA NO TENGA CONOCIMIENTO DE LA CONDUCTA SANCIONABLE). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el término para contar la prescripción se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo, contando en

cada caso el término de tres meses o tres años; siendo irrelevante el momento en que las autoridades tengan conocimiento de tales irregularidades, pues el citado precepto no establece tal condición para que se dé el supuesto.”



TRALORIA
a de sus
spañis
atf/mc

“RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, SANCIONES POR EL PLAZO PARA SU IMPOSICION, CONFORME A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, NO PUEDE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE CONCLUYAN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES. El artículo 78, fracciones I y II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos prevé el término para que opere la prescripción para la imposición de sanciones que la propia ley establece, el cual se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en responsabilidad, o en su caso, a partir del momento en que hubiese cesado si fue de carácter continuo; sin embargo, como el precepto en cita no hace ninguna mención especial en el sentido de que el plazo para la prescripción de la imposición de sanciones que la ley prevé se deba contar a partir del día siguiente al en que concluyan las investigaciones que lleven a determinar que el servidor público incurrió en responsabilidad administrativa, no debe tomarse en cuenta la conclusión de las citadas investigaciones para efectos del cómputo respectivo.”

- - - Es por lo anterior, que esta Resolutora determina la **PRESCRIPCIÓN** de la sanción administrativa, en relación con las conductas irregulares que se le atribuye al hoy encausado [REDACTED] Por tal motivo, se determina que opera a favor del encausado la figura jurídica de la Prescripción señalada en el artículo 91 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, respecto a las irregularidades relacionadas con el incumplimiento a los requerimientos de información o documentación derivado de la Auditoría número **SON/PROGREG/14**, del ejercicio fiscal **dos mil doce**.

- - - A lo anterior, sirve de sustento la Tesis en Materia Administrativa que se identifica con los datos siguientes: Registro No. 179759, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004, Página: 544, Tesis: 2a. /J. 186/2004, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, cuyo rubro y texto establecen:-----

“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD SANCIONADORA CON RELACIÓN A LAS CONDUCTAS NO ESTIMABLES EN DINERO, ES EL INDICADO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMAS PUBLICADAS EL 21 DE JULIO DE 1992 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 78, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982, establecía que “las facultades del superior jerárquico y de la Secretaría para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetarán a lo siguiente: I. Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero...”. Ahora bien, al reformarse la mencionada ley mediante Decreto publicado en el citado órgano de difusión oficial el 21 de julio de 1992, el legislador derogó la referencia expresa que se hacía a la responsabilidad no estimable en dinero, y en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente precisó que ello obedecía a que hay conductas que sin tener repercusiones económicas pueden ser constitutivas de actos u omisiones graves. En consecuencia, la anterior derogación no significa que en los casos señalados la facultad sancionadora haya quedado sin plazo de prescripción para su ejercicio, sino que en la frase “en los demás casos” contenida en la fracción II del precepto legal referido quedan incluidas aquellas conductas no previstas en la fracción I, como sucede con las no estimables en dinero, resultando que la facultad para sancionarlas prescribe en tres años de conformidad con aquella fracción, sobre todo que la redacción de las fracciones I y II del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no deja margen de discrecionalidad a las autoridades sancionadoras para decidir el plazo de prescripción correspondiente, pues su regulación debe considerarse estricta, por lo que si la conducta infractora

genera un impacto económico menor a diez veces el salario mínimo mensual vigente, la posibilidad de sancionarla prescribe en un año, de acuerdo con la primera de las fracciones señaladas; en cambio, conforme a la segunda, si la conducta produce un daño o beneficio mayor a esas diez veces de salario o no es cuantificable en dinero la facultad para sancionarla prescribe en tres años.”

VII.- En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 19 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta Autoridad como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente suprimiendo los datos personales del Ciudadano encausado [REDACTED] en virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el consentimiento expreso por escrito, o por medio de autenticación similar de parte de dicho encausado, para que sus precitados datos personales puedan difundirse.- -

- - - Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con el numeral 14 fracción I del Reglamento Interior aplicable de la Secretaría de la Contraloría General, se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos:-----

-----**RESOLUTIVOS:**-----

PRIMERO.- Que la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, es y ha sido competente para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, por las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo I de esta resolución.- - - - -

SEGUNDO.- No es dable sancionar al Ciudadano encausado [REDACTED] toda vez que esta Autoridad se encuentra imposibilitada para entrar al estudio de los supuestos contemplados en las diversas fracciones del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, pues se actualiza el artículo 91 fracción II de la citada Ley de Responsabilidades, al haberse radicado los hechos base de la imputación de forma prescrita, como quedó demostrado en el Considerando VI de la presente resolución.- - - - -

TERCERO.- Notifíquese personalmente esta resolución al Ciudadano encausado [REDACTED] en el domicilio señalado en autos para tales efectos y por oficio a la denunciante con copia de la presente Resolución; comisionándose para tal diligencia a los Ciudadanos Licenciados CARLOS ANIBAL MAYTORENA QUINTANA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o PRISCILLA DALILA VÁSQUEZ RÍOS y/o CARMEN ALICIA ENRIQUEZ TRUJILLO y como testigos de asistencia los Ciudadano Licenciados ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o CARLOS ANIBAL MAYTORENA QUINTANA y/o YAMILI MOLINA QUIJADA y/o FRANCISCO ALBERTO GENESTA GASTELUM y/o CHRISTIAN DANIEL MILLANES SILVA y/o EDUARDO DAVID HIRIART VILLAESCUSA y/o ANA DANIXIA ESPINOZA APODACA, quienes se encuentran adscritos a esta Coordinación Ejecutiva. Lo anterior con

TRAMITACION
a de S.
sponsa
atrimo

fundamento en el artículo 172, fracción III del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia. Asimismo, hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta Unidad Administrativa, comisionándose en los mismos términos a los Ciudadanos Licenciados ÁLVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o ÓSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA CUESTA, y como testigos de asistencia a los Ciudadanos Licenciados CRISTINA IRENE RODRÍGUEZ ÁLVAREZ y/o ÓSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA CUESTA y/o ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO y/o YAMILI MOLINA QUIJADA. Lo anterior con fundamento en el artículo 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia.-----

CUARTO.- En su oportunidad, notifíquese a las autoridades correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar, y posteriormente, previa ejecutoria de la presente resolución, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.-----

- - - Así lo resolvió y firma la **Licenciada María de Lourdes Duarte Mendoza, Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora**, dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número **RO/46/16** instruido en contra del Ciudadano encausado [REDACTED] ante los testigos de asistencia que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe.----- **DAMOS FE.-**

LICENCIADA MARIA DE LOURDES DUARTE MENDOZA
Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución
de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la
Secretaría de la Contraloría General.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL
y Resolución Ejecutiva de Sustanciación
y Resolución de Responsabilidades
y Situación Patrimonial

LIC. DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES
LISTA.- Con fecha 27 Octubre de 2020, se publica en Lista de Acuerdos la Resolución que antecede.----- **CONSTE.-**
C.D.E.L.

LIC. PRISCILLA DALILA VÁSQUEZ RÍOS



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación
y Resolución de Responsabilidades
y Situación Patrimonial

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

OTRO